

# Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Especial

SENTENCIA DE 3 DE ABRIL DE 1945.—*Competencia (depósito de menores).*

Según se desprende, a efectos de competencia, del conjunto de lo actuado en el expediente de depósito de menores, D. Juan y D. Dionisio M. C. fueron expulsados de la casa de su padre, acogiéndose aquéllos a la de su tío, que tenía su domicilio en Madrid, en cuya población vienen permaneciendo y sin legal oposición de su padre, el que, al decretarse su depósito por el Juez de Primera Instancia, número 4, de Madrid, con el obligado señalamiento de alimentos en el auto en que así se acuerda, ha promovido cuestión de competencia invocando el fuero de su domicilio—Ceuta—ante este último Juzgado. Si bien conforme al artículo 64 de la Ley de Enjuiciamiento civil, el domicilio de los hijos en potestad es el de sus padres y, según la regla 20 del artículo 63 de la Ley procesal, en los depósitos de personas será Juez competente cuando, como en este caso, no existen autos anteriores, el del domicilio de la persona que deba ser depositada, por lo que podría a primera vista sostenerse que, siendo Ceuta el domicilio del padre, como lo es, este último Juzgado sería competente para conocer del depósito en cuestión, es lo cierto que una reiteradísima jurisprudencia de este Tribunal, formulada generalmente a propósito de expedientes de depósito de mujeres casadas para entablar demandas de divorcio, pero que es aquí perfectamente aplicable, por identidad de razón, tiene establecido que las normas arriba citadas carecen de aplicación, cuando, como ocurre en este caso, la persona cuyo domicilio determina legalmente el de la que ha de ser depositada, viene tolerando la residencia habitual de ésta en distinto lugar, pues entonces ha de entenderse como domicilio, a efectos de competencia, el que realmente lo es del depositado, y por ello ha de admitirse la competencia del Juzgado de Madrid, que viene conociendo de los autos. Con mayor razón debe ser desestimado el argumento esgrimido invocando la regla 21 del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento civil, que dispone que las cuestiones de alimentos provisionales cuando éstos se pidan incidentalmente en los casos de depósitos de personas o en juicio, será Juez competente el del lugar en que tenga su domicilio aquel a quien se pidan, puesto que este precepto es de evidente inaplicación cuando los alimentos no se discuten en un juicio, sea o no incidental, sino que se fijan en el auto decretando el depósito en cumplimiento del deber que impone al Juez el artículo 1916 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

SENTENCIA DE 12 DE ABRIL DE 1945.—*Promesa de liberación de deuda.*

Los problemas planteados en este litigio tienen su punto de arranque en el hecho de que el precio de la compraventa celebrada el 18 de junio de 1936 quedó en poder del comprador para aplicarlo al pago de deudas contraídas por el vendedor, sin que se haya contado para ello con la conformidad de los acreedores, ni conste en forma alguna que el comprador se obligase a obtener tal conformidad, lo que lleva a configurar jurídicamente este pacto como sustitución de la entrega del precio por una promesa de liberación o asunción interna de la deuda que, a diferencia de la novación subjetiva determinante de la liberación del deudor primitivo, mantiene la relación existente entre éste y sus acreedores, a la vez que provoca el nacimiento de un nuevo vínculo entre el deudor originario o vendedor y el deudor por subrogación o comprador, en virtud del cual este último queda ligado para con aquél al pago de las deudas y a la posible resolución de la venta por incumplimiento de la obligación contraída.

## Tribunal Especial de contratación en zona roja

Un gran número de sentencias reafirma la jurisprudencia, sentada desde el principio de este año y consignada en esta Revista (1945, p. 219), acerca de la naturaleza contractual del pago, sobre todo cuando contiene una novación, como ocurre si el deudor paga con medios de pago diferentes a los estipulados, por ejemplo, con dinero rojo; y, en consecuencia, la anulabilidad del contrato de pago por vicios de consentimiento. Creemos haber estado entre los primeros que emitieron tamaña doctrina (REVISTA CRÍTICA, 1943, p. 207).

Las sentencias que tenemos a la vista son las siguientes: del 20 de febrero (núm. 8), 26 de febrero (núm. 10), 26 de febrero (núm. 11), 1.º de marzo (núm. 12), 13 de marzo (núm. 14), 21 de marzo (núm. 16), 24 de marzo (núm. 17), 24 de marzo (núm. 18), 16 de abril (núm. 20), 21 de abril (núm. 21), 27 de abril (núm. 22), 1.º de mayo (núm. 23), todas ellas del corriente año. A continuación reproduciremos algunos considerandos típicos desprendidos de la sentencia núm. 16, del 21 de marzo de 1945:

«De los medios de extinguir las obligaciones, regulados en el capítulo cuarto del título primero del libro cuarto del Código civil, hay unas, como la pérdida de la cosa debida, si es determinada, la confusión y la compensación que producen su efecto propio, o sea la extinción de la obligación a la que afectan, sin la voluntad y aun sin el conocimiento de los acreedores ni de los deudores; y otros, como la condonación y la novación, que, para su eficacia, requieren el acuerdo de voluntades entre el acreedor y el deudor (art. 1.187, en relación con los 632 y 633), o del acreedor con un tercero (art. 1.205); es decir, que son medios estos últimos de carácter contractual, por exigir, para su eficacia, el consentimiento de las partes; objeto que es la extinción de la obligación del deudor y el nacimiento, para el acreedor, de la obligación de no reclamar la extinguida, y causa, que puede ser la mera liberalidad en la condonación o la nueva obligación en la novación. El pago, en las obligaciones de dar, es uno de los medios extintivos de

carácter contractual, que exigen, para producir su efecto, una manifestación de voluntad del deudor, respecto al concepto de pago en que se entrega la cosa, coincidente con la del acreedor, en cuanto a que la entregada sea la debida, y a su recepción por razón de pago, y no como préstamo, depósito, donación y otra cualquiera por la que pudiera entregarse y recibirse respectivamente. Contra esto, nada arguye que el Código civil conceda eficacia a pagos en los que falta la manifestación de la voluntad del acreedor, como ocurre en el pago a un incapaz o a un tercero, cuando en uno y otro caso se ha convertido en utilidad del acreedor, porque la extinción de la deuda, en tales casos, no se produce por el pago mismo, sino a consecuencia de la excepción que surge a favor del deudor, fundada en el enriquecimiento injusto por falta de causa, que sobrevendría, a favor del acreedor, si después de aprovecharse de la utilidad que le ha producido el pago defectuoso, tratase de cobrar lo antes debido. Tampoco se desprende argumento válido alguno contra la conclusión aceptada de la consideración de la fuerza liberatoria de la consignación, aun contra la voluntad del acreedor, porque entonces, si la consignación está bien hecha, se sustituye su voluntad por la correspondiente declaración del Juez, sustitución semejante a la ordenada por el artículo 1.514 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el otorgamiento de la escritura de venta al rematante de los bienes subastados en el procedimiento de apremio de la vía ejecutiva. Si, como queda demostrado, en el pago regular de las obligaciones de dar ha de intervenir para su eficacia el consentimiento de acreedor y deudor, es evidente que la validez de ese consentimiento, de carácter contractual, como se ha dicho, requiere el conocimiento y la libertad del que le preste, por lo que, si el conocimiento está perturbado por el error, o la voluntad por la violencia o el miedo, será nulo, por disposición «general» contenida en el artículo 1.265 del Código civil, y «especial» para casos como el de autos en el 2.º de la Ley de 5 de noviembre de 1940.

LA REDACCIÓN.